

Distr.
GENERAL

E/CN.4/1994/NGO/46
1º de marzo de 1994

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

COMISION DE DERECHOS HUMANOS
50º período de sesiones
Tema 11 del programa

ULTERIOR PROMOCION Y FOMENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS
LIBERTADES FUNDAMENTALES, CON INCLUSION DE LA CUESTION DEL
PROGRAMA Y LOS METODOS DE TRABAJO DE LA COMISION

Exposición presentada por escrito por Defensores de los
Derechos Humanos, organización no gubernamental reconocida
como entidad consultiva (Categoría II)

El Secretario General ha recibido la siguiente exposición escrita que se distribuye con arreglo a la resolución 1296 (XLIV) del Consejo Económico y Social.

[21 de febrero de 1994]

Relación entre las fuerzas de defensa civil y las violaciones
de los derechos humanos - La situación en Guatemala

1. En la resolución 1992/57 del 3 de marzo de 1992, la Comisión de Derechos Humanos pidió al Secretario General que solicitara a los gobiernos y las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales información sobre las fuerzas de defensa civil y los derechos humanos. La Comisión reconoció que las fuerzas de defensa civil pueden violar la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Defensores de los Derechos Humanos respondió a esa solicitud con una declaración escrita completa en que se trata específicamente la situación de la fuerza de defensa civil en Guatemala. El fondo de ese informe fue incorporado al informe del Secretario General presentado a la Comisión (E/CN.4/1993/34).

GE.94-11551 (S)

2. Conforme al informe del Secretario General, el 9 de marzo de 1993 la Comisión aprobó la resolución 1993/54, en que la pidió que presentara información adicional sobre las fuerzas de defensa civil y su relación con los abusos de los derechos humanos. Por este medio, Defensores de los Derechos Humanos presenta la siguiente información adicional sobre las patrullas civiles de Guatemala. (Para un examen más completo de lo resumido en el presente documento, véase la declaración escrita completa de Defensores de los Derechos Humanos al Subsecretario General de Derechos Humanos en respuesta a la resolución 1993/54 de la Comisión de Derechos Humanos.)

El Presidente de León no ha respetado su compromiso previo
de disolver las patrullas civiles

3. Las fuerzas de defensa civil guatemaltecas, conocidas como patrullas civiles, son grupos de campesinos y aldeanos, integrados principalmente por guatemaltecos autóctonos, organizados y controlados por el ejército con la presunta meta de combatir a las guerrillas antigubernamentales*. (Para información detallada sobre la historia de las patrullas civiles desde 1980 hasta 1992, véase el informe de Defensores de los Derechos Humanos de 1993.)

4. Si bien la comunidad internacional de derechos humanos celebró vivamente la llegada de Ramiro de León Carpio a la Presidencia guatemalteca, su optimismo ha resultado ser infundado. No sólo el ex ombudsman de derechos humanos ha renunciado totalmente a su compromiso previo de disolver las patrullas civiles sino que, sin un apoyo político nacional sólido ha comenzado a recurrir a ellas como base de poder. En vez de cumplir su promesa inicial, se ha convertido en el primer presidente civil en identificarse públicamente con las patrullas civiles.

5. Pese a que el Sr. de León denunció el sistema de patrullas cuando formaba parte de la Asamblea Constituyente de Guatemala y, nuevamente, en su calidad de ombudsman de derechos humanos, como Presidente se ha vuelto su partidario acérrimo. Ha afirmado que estima que las patrullas civiles cumplen una función importante, pese a que abiertamente reconoce que son culpables de graves violaciones de los derechos humanos.

6. El Sr. de León totalmente ha hecho caso omiso de la resolución 1993/88 de la Comisión, en que ésta manifestó su preocupación porque las patrullas civiles eran responsables de violaciones de los derechos humanos y exhortó al Gobierno de Guatemala a procurar la abolición del sistema de patrullas.

7. Desde que el Sr. de León asumió el poder el 5 de junio de 1993, se ha registrado un señalado incremento de las violaciones de los derechos humanos.

* En el presente documento no se hará referencia a ningún documento de consulta puesto que una lista completa de las fuentes de la información contenida en este resumen figura en la declaración escrita completa de Defensores de los Derechos Humanos presentada a la Comisión y se puede solicitar a Defensores de los Derechos Humanos.

Los grupos de derechos humanos nacionales, así como los que tienen sede en el exterior, han comunicado unánimemente que el número de secuestros, asesinatos y torturas se ha incrementado bajo la Presidencia del Sr. de León.

8. Específicamente, se ha producido un aumento vertiginoso de la violencia de las patrullas civiles. El 4 de agosto de 1993, tres personas fueron muertas y muchas otras heridas cuando integrantes de las patrullas abrieron fuego contra manifestantes pacíficos en la provincia de Huehuetenango. Los integrantes de las patrullas abrieron fuego sin advertencia previa. Pese a que el ataque fue grabado en vídeo y se sabe quiénes fueron los atacantes, aún está por realizarse una investigación judicial del asunto.

9. En algunas provincias, los dirigentes de las patrullas civiles, en esencia, se han convertido en jefes militares locales. En el pueblo de San Pedro Jocopilas, el 29 de junio de 1993 el dirigente local ordenó a sus hombres que ejecutaran a diez miembros de una familia rival. Los patrulleros ataron a la familia y los ametrallaron con fusiles de asalto suministrados por el ejército. Varios fueron torturados antes. Entre los muertos se encontraba una niña de 16 años que estaba encinta.

Las patrullas civiles guatemaltecas son innecesarias y generalmente ponen en peligro el disfrute de los derechos y libertades fundamentales garantizados en los instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas

10. El sistema de patrullas civiles, que no ha disminuido bajo la presidencia de de León, viola los derechos humanos fundamentales tanto de los propios patrulleros como de sus víctimas. La experta independiente y numerosas organizaciones de derechos humanos siguen recibiendo muchas noticias fiables de que los patrulleros civiles son tanto víctimas como autores de ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones ilícitas y desapariciones.

11. A la vez que se permite que los gobiernos exijan determinadas formas de trabajo a sus ciudadanos, el sistema de patrullas civiles exige el tipo de trabajo obligatorio inadmisibles en virtud de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos. Muchos moradores de las zonas rurales se ven obligados a sumarse a las patrullas por el acoso del ejército y quienes se niegan a formar parte de ellas son objeto de amenazas de muerte y violencia física.

12. Las patrullas han destruido la fibra social de las poblaciones indígenas, obligando a los aldeanos a espiarse unos a otros y creando desconfianza entre los miembros de un mismo clan que antes eran pacíficos.

13. Además, muchos campesinos dependen de los ingresos de las labores agrícolas de temporada para mantener a sus familias. A menudo, los miembros de las patrullas no pueden dejar sus aldeas originarias y, por lo tanto, sufren severas pérdidas económicas.

14. Las patrullas civiles de Guatemala discriminan en forma inherente a la población indígena, por ser los ciudadanos que con más frecuencia son obligados a constituir las, así como el blanco de su violencia.

15. El ordenamiento jurídico de Guatemala no puede ofrecer remedio porque le faltan el poder y la determinación políticos para castigar la violencia de las patrullas. Por el contrario, el órgano judicial con frecuencia sirve de escudo al ejército y los patrulleros contra las sanciones o el castigo penales.

16. Si bien los pactos internacionales de derechos humanos protegen el derecho a la libertad de circulación, muchos campesinos en Guatemala se ven obligados a abandonar su domicilio y sus aldeas, por orden militar directa o por miedo a la violencia de las patrullas. Asimismo, a menudo los campesinos se ven obligados a permanecer en sus aldeas para formar parte de las patrullas, a pesar de su deseo de desempeñar labores migratorias.

17. Por lo general, los niños son explotados y abusados al ser obligados a desempeñar servicios en las patrullas civiles de Guatemala. Los padres que no pueden patrullar han sido obligados a enviar a sus hijos en su lugar, aun cuando son menores de edad. Se ha exigido que niños hasta de 8 años patrullen. Se han producido muchos accidentes fatales debido a la inexperiencia de los niños con las armas, a la vez que se les ha privado de una educación por sus obligaciones en la patrulla.

Conclusión

18. Tal como lo demuestra la información precedente, las patrullas civiles guatemaltecas sistemáticamente violan no sólo el derecho interno, sino también muchos de los derechos humanos básicos garantizados a todos por instrumentos de las Naciones Unidas como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El sistema de patrullas ha sido condenado repetidas veces por organizaciones nacionales de derechos humanos, así como por organizaciones no gubernamentales internacionales como Americas Watch y Amnistía Internacional. La Comisión de Derechos Humanos y la Asamblea General de las Naciones Unidas también han manifestado su desaprobación, y tanto el antiguo experto independiente de la Comisión, el Sr. Christian Tomuschat, como la actual, la Sra. Mónica Pinto, han hecho un llamamiento a la abolición inmediata de las patrullas civiles. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha pedido al Gobierno de Guatemala que suprima la participación forzosa en las patrullas.

19. A pesar de la presión internacional y local, el Gobierno de Guatemala no ha querido abolir las patrullas civiles, ni siquiera convertirlas en un sistema de auténticas patrullas voluntarias. Aun bajo el Gobierno civil del antiguo ombudsman de derechos humanos, el Presidente de León, las patrullas siguen violando los derechos humanos de los guatemaltecos de las zonas rurales.

20. Por lo tanto, pedimos que la Comisión inste al Gobierno de Guatemala a adoptar medidas para la total abolición de las patrullas civiles. La Comisión debería volver a reconocer el vínculo directo entre las fuerzas de defensa civil y las violaciones de los derechos humanos, y condenar la continuación del recurso a esas fuerzas por los gobiernos, en particular el de Guatemala.

La Comisión debería pedir que el Gobierno de Guatemala inicie un programa amplio para poner término a la participación forzosa en las patrullas civiles y ofrecer recursos efectivos a las personas cuyos derechos han sido violados por la existencia de las patrullas. La experta independiente debería incluir esas medidas y recursos en sus recomendaciones. También instamos firmemente a que la experta independiente rinda cuentas de esta cuestión a la Comisión en su 51º período de sesiones.
